

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ALBA LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
DEMANDADO	LIBARDO DEL SOCORRO BETANCUR CADAVID
RADICADO	05088-31-05-001-2017-00865-02
ORIGEN	JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CTO DE BELLO
TEMAS Y SUBTEMAS	TERMINACIÓN POR TRANSACCIÓN

AUTO INTERLOCUTORIO No.002

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Corresponde a la Sala resolver sobre el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, suscrito igualmente por la demandante y su apoderado, mediante el cual solicitan la terminación por transacción del proceso promovido por **ALBA LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ** contra el señor **LIBARDO DEL SOCORRO BETANCUR CADAVID**, radicado **05080-31-05-001-2017-00865-02**.

ANTECEDENTES

La señora **ALBA LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ** presentó demanda ordinaria laboral en contra del señor **LIBARDO DEL SOCORRO BETANCUR CADAVID** con el fin de que: **1)** Se declare la existencia del contrato de trabajo entre las partes, vigente desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 5 de junio de 2016. **2)** En consecuencia, reclamó el pago de salarios, horas extras, cesantías e intereses a las cesantías, aportes a la seguridad social integral entre 2002 y 2014, y dotación. **3)** Seguido, solicitó el pago de la indemnización por despido injusto, la sanción por la no consignación de las cesantías y la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 CST (Archivo 01 ED).

La Litis fue desatada en primera instancia mediante Sentencia del 3 de diciembre de 2021, a través de la cual el Juzgado de primera instancia declaró probadas las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación, absolviendo al demandado de las pretensiones incoadas en su contra (Archivo 12.3 ED).

Inconformes con la decisión de primera instancia, ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la misma, para que fuera resuelta en esta instancia.

No obstante, a través de memorial arrimado a la Corporación 5 de septiembre de 2022, el apoderado de la demandada arrimó memorial suscrito por la demandante y su apoderado, a través del cual se solicita la terminación, entre otros, del presente proceso, previo acuerdo de transacción alcanzado por las partes (Archivo 03 ED Tribunal). En el mismo sentido, reposa en el Archivo 04 ED Tribunal memorial de la parte demandante informando dicha situación con las mismas consecuencias procesales descritas en precedencia.

CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 312 CGP, aplicable a los asuntos laborales por remisión expresa del artículo 145 del CPTSS, el cual estipula que “(...) En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la Litis (...)”.

Ahora bien, en el inciso tercero del artículo 312 del CGP se ha instituido que para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior, precisando su alcance o acompañando el documento que la contenga. Así mismo, indica que “(...) el juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia (...)”.

Sobre el particular se ha dispuesto en materia laboral, que dicha transacción es válida si se trata de derechos inciertos y discutibles (art. 15 CPT y SS).

En relación con dicha figura legal, la Jurisprudencia Especializada, a partir de la providencia AL1761-2020, remembrada en la AL2004-2021, retomó el criterio según el cual es procedente el estudio de la transacción y su consecuente aceptación siempre que se reúnan los requisitos legales previstos para ello. En dicha oportunidad, así lo explicó:

“(...) Ante una nueva revisión del asunto, la Sala considera oportuno replantear lo que hasta la fecha fue su criterio mayoritario y arribar a un entendimiento distinto de los artículos 15 del Código Sustantivo del Trabajo y 312 del Código General del Proceso, en el sentido de considerar que es procedente la aceptación de la transacción, en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos legales previstos para ello.

(...)

En fundamento de ello, debe anotarse que, si bien la Sala de Casación Laboral como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene a su cargo la función de unificación de la jurisprudencia a través del conocimiento de los recursos de revisión y casación, lo cierto es que la transacción no es un mecanismo procesal incompatible o contrapuesto a estas facultades de autoridad de cierre, ni a la etapa extraordinaria de casación del juicio laboral.

En esa dirección, si bien la transacción no está regulada de forma expresa en el Código Procesal del Trabajo, lo cierto es que esta, al igual que otras tantas figuras no establecidas en aquel estatuto, es plenamente aplicable a los asuntos laborales en virtud de la remisión a las normas generales del proceso que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y aunque su solicitud de aprobación se dé en el curso del trámite de casación, no significa que sea extemporánea o ajena al juicio laboral, dado que en esta etapa el proceso aún sigue en curso y la decisión de instancia recurrida no ha cobrado firmeza.

De ahí que la facultad de las partes para terminar de manera temprana y concertada el litigio a través de esta figura, no se enerva por su falta de previsión en el artículo 14 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o por su solicitud en sede de casación, pues el artículo 312 del Código General del Proceso señala que se puede presentar en cualquier estado del proceso e incluso respecto de «las diferencias que surjan con ocasión al cumplimiento de la sentencia».

Aunado a ello, la Sala estima que darle viabilidad a la aplicación de la transacción permite la materialización de otros principios procesales y constitucionales que también irradian el juicio laboral, como son los de economía procesal, lealtad procesal y buena fe de las partes en controversia; y no compromete el criterio de la Corte para resolver futuras controversias, toda vez que su labor se ciñe a verificar la incertidumbre «real y efectiva» sobre los derechos transados por las partes y luego de ello, a impartir aprobación a lo convenido por estas, sin entrar a estudiar el asunto de fondo pues no le incumbe declarar o desestimar el derecho en discusión a partir de la verificación de lo fallado por el juez de segunda instancia, como sí le correspondería en su labor de tribunal de casación.

Por ello, antes que proscribir la procedencia de la figura en sede de casación laboral, es pertinente avalar su aplicación, precedida claro está, de una rigurosa y cuidadosa verificación que será la que garantice la observancia de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores, tal y como lo prevé el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Carta Política, y en virtud del carácter público de las normas del trabajo y su propósito principal de dar

equilibrio social a las relaciones patrono laborales -artículo 1.º del Código Sustantivo del Trabajo-

En ese contexto, la Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda la aprobación de la transacción, esto es, que: (i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Del documento aportado al plenario, visible en el Archivo 03 Tribunal, se extrae que el acuerdo fue suscrito por la parte demandante y su apoderado, así como por el apoderado de la parte demandada, quien ejerció su mandato con facultad para transigir, presentándolo ante esta Corporación, acuerdo el cual condensó:

*“(...) Ambas partes hemos llegado a un acuerdo completo acerca de las pretensiones de la demandante en los dos procesos que cursan en contra del mismo demandado, el primero el de la referencia y el segundo que se encuentra en el Juzgado 1º Laboral del Circuito de bello con radicado 050888310500120210021900, el cual fue aprobado por la misma demandante a título de transacción de derechos inciertos y discutibles en la suma acordada en **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$5.800.000 M/L)**, la cual se consignará durante la semana del 29 de agosto al 2 de setiembre en la cuenta de ahorros Bancolombia #10912380920 a nombre del Dr. HERIBERTO CÓRDOBA ACEVEDO.*

(...)

2. El presente acuerdo tiene carácter de transacción y, en consecuencia, hace tránsito a cosa juzgada en los términos de ley en todo lo relacionado con los dos procesos laborales que unieron a las partes, conforme a los artículos 20 y 78 C.P Laboral, una vez se haya hecho efectiva la obligación arriba enunciada.

3. Como consecuencia del anterior acuerdo, la parte demandante manifiesta que desiste de las dos demandas de la referencia y con la recepción de las mencionadas sumas de dinero declara a paz y salvo al señor LIBARDO DEL SOCORRO BETANCUR CADAVID y a todas las personas de la FAMILIA BETANCUR CADAVID (...)

4. Solicitamos al despacho que proceda a decretar la terminación del proceso de la referencia y consecuencialmente se ordene su archivo y no se condene en costas (...).”

La solicitud en comento se dirigió ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, autoridad que conoce actualmente del asunto por virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes frente a la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello el 3 de diciembre de 2021, y que, por lo mismo no ha alcanzado firmeza o efectos de cosa juzgada material. Así mismo, se resalta que, el pago de la suma acordada se efectuó por parte del extremo obligado el 2 de septiembre de 2022, como lo muestra el comprobante de transacción bancaria de folios 7 a 8 Archivo 04 ED Tribunal.

Bajo ese contexto, el acuerdo transaccional descrito, se constata, no desconoce derechos ciertos de la trabajadora ni se imponen obligaciones que se encuentren por fuera del marco de la legalidad, en atención a que, entre las partes existe un derecho litigioso relativo a verificar la existencia de un contrato de trabajo, del cual, aún no hay certeza sobre la configuración de los presupuestos que den paso a la exigibilidad de las consecuencias económicas derivadas de este, tal como lo ha explicado la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo, en Auto AL1182-2021¹:

“(...) En primer lugar, entre las partes existe un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver, relativo a determinar si la terminación del vínculo laboral del actor obedeció a una justa causa y las consecuencias económicas que ello acarrearía en caso de probarse dicho supuesto.

¹ Postura reiterada en Auto AL2551-2021

En segundo lugar, el derecho que es objeto de negociación es incierto y discutible, toda vez que no hay certeza plena sobre la configuración de las condiciones o supuestos fácticos que causan su exigibilidad (CSJ AL, 7 feb. 2009, rad. 32051), y además aún está sub judice o en discusión en sede casacional. (...)”.

Además, el mismo Alto Tribunal ha precisado que no corresponde a la Sala decidir la justeza del acuerdo. Así quedó dicho en Auto AL1129-2021:

“(…) Finalmente, conviene aclarar que en asuntos como el discutido, una vez acreditados los requisitos formales de un acto mutuo como la transacción presentada, la justeza misma del contenido del acto no es un asunto que esté bajo la órbita del juzgador reconocer, comoquiera que son las partes las que autónomamente fijaron los linderos de su controversia y la dieron por superada mediante alguno de aquellos actos jurídicos, con prescindencia de la administración de justicia. Así lo recordó la Sala en providencia CSJ SL1249-2014, reiterada en la Sentencia CSJ SL2404-2020, cuando afirmó: Finalmente, resta advertir que a la Corte no le compete definir si la suma que recibió la actora en la conciliación era una «justa» o «equitativa» contraprestación para transar sus derechos, pues esa es una cuestión que deciden libre y autónomamente las partes en el ejercicio de la conciliación, que, vale recalcarlo, hace tránsito a cosa juzgada y le impide a la justicia ordinaria reexaminar los puntos contemplados y concertados por las partes.(...)”.

En atención a lo expuesto considera la Sala procedente aceptar el acuerdo transaccional al que llegaron las partes y dar por terminado el proceso. Sin costas en esta instancia de acuerdo a lo solicitado por las partes, y en concordancia con el inciso 4° del artículo 312 CGP.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR LA TRANSACCIÓN que sobre la cuestión litigiosa celebraron las partes en este juicio ordinario, en el que fungió como demandante la señora **ALBA LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ** y como demandado el señor **LIBARDO DEL SOCORRO BETANCUR CADAVID**.

SEGUNDO: DAR por terminado el presente proceso.

TERCERO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 015 del 01
de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>